

Conflicto étnico, reto ético en Estados Unidos: más allá del blanco y el negro

En las últimas semanas del mes de abril, la ciudad norteamericana de Baltimore ha sido testigo de un nuevo estallido de violencia étnica, provocado por la muerte del joven afroamericano Freddy Gray, detenido por la policía el 12 de abril y fallecido una semana después, aún bajo custodia policial. Estos dramáticos acontecimientos se suman a una lista ya demasiado larga, de entre los que cabe destacar, por su cercanía en el tiempo, los sucesos de Ferguson (agosto de 2014) y los de Los Ángeles en 1992, tras la muerte de Rodney King, por su gran impacto mediático y por su relevancia posterior. Estos disturbios raciales ofrecen la ocasión para reflexionar acerca de la integración étnica en los Estados Unidos (EE.UU.), cuando entramos ya en la fase final de la presidencia de Barack Obama, el primer presidente afro-americano de la historia de los EE.UU. y cuando se cumplen cincuenta años del movimiento de los derechos civiles. ¿Cuál es la situación, qué avances hay, en qué puntos hay estancamiento o retroceso, qué perspectivas podemos atisbar? A estas cuestiones intentamos responder en nuestro comentario editorial.

¿Cómo están las cosas?

En el mes de abril de 1967, Martin Luther King tuvo una famosa conferencia en la Universidad de Stanford, titulada *La otra América*, en la que denunciaba que la población afroamericana en EE.UU. sufría un triple gueto de raza, de pobreza y de miseria humana, indicando además que «las revueltas permiten aflorar el grito silencioso de los silenciados». Un año después, el 4 de abril de 1968, Martin Luther King fue asesinado. En las semanas siguientes, hubo protestas en unas 125 ciudades norteamericanas,

entre las que destacó por su virulencia Baltimore. En abril de 2015, la misma ciudad de Baltimore ha vuelto a las portadas de los periódicos por un nuevo episodio de violencia étnica. ¿Qué gritos silenciosos estamos acallando, qué gritos podemos oír ahora? En palabras del líder negro de la noviolencia, América «ha sido incapaz de escuchar que los apuros de los negros pobres se han agravado en los últimos doce o quince años; ha sido incapaz de escuchar que las promesas de libertad y justicia no se han cumplido; y ha sido incapaz de escuchar que amplios sectores de la sociedad blanca están más preocupados acerca de su tranquilidad y el status quo que acerca de la justicia y la humanidad». Palabras que sirven también para iluminar el momento presente.

Es cierto que, en las últimas décadas, ha habido avances significativos de cara a la superación de la discriminación racial. Además de los cambios en la mentalidad y en determinadas prácticas, en el ámbito jurídico-político debemos recordar que fue en 1964 cuando se firmó la Ley de Derechos Civiles, que prohíbe la segregación racial en las escuelas, en el lugar de trabajo y en lugares públicos. Por limitarnos al periodo de hace cincuenta años, en 1965 se aprueba la Ley de Derecho de Voto, una ley histórica que prohibió las prácticas discriminatorias en el derecho al voto a los afroamericanos. Ahora bien, más allá de lo jurídico y formal, ¿cómo están las cosas?

De acuerdo con diversos estudios, compilados por la American Psychological Association, dentro de su programa de minorías étnicas y estatus socioeconómico (SES), los menores afroamericanos tienen una tasa de pobreza tres veces superior a los niños caucásicos; las tasas de desempleo de los afroamericanos doblan las de los caucásicos; un varón negro empleado a tiempo completo cobra, de media, el 72% de un varón blanco y el 85% de una mujer blanca. En cuanto a la vivienda, menos de la mitad de los afroamericanos la tiene en propiedad, porcentaje que sube al 75% entre la población blanca. En el terreno educativo, aunque ha habido avances relevantes, sigue habiendo serios hándicaps por motivos socioeconómicos; además, se constata que incluso los estudiantes afroamericanos

más brillantes suelen tener un currículo menos exigente, estar en escuelas con menos recursos y tener profesores con expectativas bajas respecto a su resultado académico, todo ello comparado con la media. Los datos de desigualdad racial en el terreno educativo son muy importantes, como ha indicado recientemente el sociólogo Robert Putnam, cuyo libro *Our kids. American Dream in Crisis* (marzo de 2015) muestra la interrelación entre pobreza y nivel educativo de las familias.

En este contexto, es muy relevante el significado de la presidencia de Barack Obama. El hecho de tener, por primera vez en la historia del país, un presidente afroamericano, es un paso histórico que, por un lado, muestra el avance logrado en las últimas décadas y, por otro, abre nuevas expectativas hacia una mayor igualdad. Cuando entramos en la fase final del segundo mandato de Obama, es ya momento de extraer algunas consecuencias y de analizar las realizaciones logradas en este periodo. A principios de mayo de 2015, el propio presidente Obama declaró que «la lucha a favor de la justicia racial seguirá siendo una misión para mí, no sólo para el resto de mi mandato presidencial, sino para el resto de mi vida». Los datos, sin embargo, no son fáciles de encontrar y tampoco son concluyentes. Digamos, de momento, lo siguiente: la confluencia de un marco legislativo adecuado y de una voluntad política evidente en el nivel de la Presidencia de EE.UU., no parecen ser suficientes para resolver la situación en el corto plazo. Quizá hay otros factores y otras dinámicas. Veámoslas en el siguiente apartado.

¿Cómo se explica esta situación?

Hace ya algunos años, la profesora de filosofía política Iris Marion Young, en su libro *La justicia y la política de la diferencia*, intentó explicar la realidad social a partir del concepto de opresión, desplegado en cinco rostros o facetas: la explotación, entendida como transferencia de los resultados de trabajo de los grupos empobrecidos a los privilegiados (dimensión económica); la marginación de grupos que son expulsados o descartados de la participación útil y plena en la sociedad (nivel social); la

carencia de poder, que remite a la incapacidad de ciertos grupos para participar en la toma de decisiones (ámbito político); el imperialismo cultural como mecanismo por el que se universaliza la perspectiva del grupo dominante, hasta el punto de que se impone como norma (cuestión cultural). En quinto lugar, aparece la violencia dirigida a determinados grupos por el mero hecho de pertenecer a los mismos, que adquiere así un carácter sistemático y va más allá de acciones puntuales para convertirse en práctica social y en predisposición a sufrir dicha violencia. Lo interesante de este análisis es que la violencia sólo cobra pleno sentido si se ve en relación con los cuatro niveles anteriores. Y los estallidos de violencia, como decía Martin Luther King, remiten a una violencia estructural menos visible.

Pero es que, además, Young indica que la opresión se enraíza en «los comportamientos normales de la vida cotidiana»; presupuestos y reacciones a menudo inconscientes de gente que en las interacciones corrientes tiene buenas intenciones; influjo de los estereotipos difundidos por los medios de comunicación social y de los estereotipos culturales; así como los aspectos estructurales, las jerarquías burocráticas y los mecanismos del mercado. En definitiva, un nivel de la realidad que no se cambia fácilmente y en poco tiempo. La interacción entre los factores estructurales y la responsabilidad personal es compleja. Por ejemplo, en el caso de Baltimore que nos ocupa, la mitad de los policías implicados son afroamericanos, lo cual indica que el asunto no es simple. La fiscal general de la ciudad de Baltimore, Marilyn J. Mosby, es una joven afroamericana de 35 años proveniente de los barrios pobres de Boston y la primera persona de su familia que accedió a la universidad; su ágil, firme y riguroso papel en la investigación de los hechos ha ayudado a calmar los ánimos, en medio de un sistema judicial muchas veces percibido, sobre todo por las minorías, como claramente parcial a favor de los grupos poderosos.

Existe, por otro lado, una práctica desde hace décadas para favorecer la igualdad de oportunidades. En ocasiones se habla de discriminación positiva, aunque nosotros preferimos el término de «acción afirmativa». Se trata de una serie de medidas orientadas

a favorecer el acceso igualitario de las minorías discriminadas (minorías étnicas, mujeres, personas con discapacidad, colectivos marginados...) a determinados ámbitos de la sociedad (empleo, vivienda, educación...). Es una palanca que se ha mostrado eficaz para superar barreras insalvables, pero también es una medida discutida y discutible. Dejando de lado las cuestiones más teóricas (por ejemplo, si se maneja un concepto de justicia más formal-liberal o un enfoque más material-estructural), en la práctica se observan algunas ambigüedades y dificultades. El más polémico se refiere al supuesto desajuste (*mismatch*) que se produce en ocasiones cuando estudiantes de minorías étnicas, debido a un sistema de cuotas, entran en una universidad o en un programa que les supera desde el punto de vista académico, generando disfuncionalidades en el sistema y distorsiones en el individuo. Ahora, bien, dado el gran impacto que tiene la educación en la reproducción de las desigualdades, no está claro que estos posibles efectos negativos tengan más peso que los logros positivos. Hace unos diez años, la juez de la Corte Suprema Sandra Day O'Connor dijo que en el plazo de dos décadas, la acción afirmativa dejaría de ser necesaria; es posible, pero parece que tal momento aún no ha llegado.

Nos centramos ahora en otro aspecto que no hemos mencionado hasta ahora, pero que es absolutamente clave para entender lo que ocurre, tanto los estallidos de violencia como los elementos más estructurales: nos referimos al encarcelamiento masivo. El sociólogo Loïc Wacquant señala que se ha producido un proceso simultáneo de «prisonizar el gueto» y de «guetificar la prisión», enviando de manera desproporcionada a los jóvenes negros e hispanos a la cárcel. En EE.UU., el 68% de las personas privadas de libertad pertenecen a minorías étnicas. Aunque los afroamericanos sólo representan el trece por ciento de la población, constituyen el 58% de los reclusos y el 74% de los condenados por delitos relacionados con las drogas. Según datos oficiales, el 12% de los varones negros entre 20 y 30 años está preso. Un estudio reciente indicaba que, entre la población negra de EE.UU. de entre 25 y 34 años, hay un millón y medio menos de varones que de mujeres, debido a las muertes prematuras o a la prisión. Dicho de otro modo, por cada cien mujeres hay sólo

ochenta y tres varones (entre la población blanca, la proporción es casi paritaria). El mismo Wacquant indica que esta simbiosis mortal entre cárcel y gueto, a través de la encarcelación masiva de la población negra, define una nueva configuración social: el «hipergueto». Anteriormente, la situación de la población negra en EE.UU. ha atravesado tres fases históricas: primero, la dramática y sangrante fase de la esclavitud; segundo, la etapa de segregación racial en los Estados del Sur que, al menos en parte, coexiste en el tiempo con el tercer modelo: el gueto urbano en el Norte de EE.UU. Se trata de tres modos de conseguir tanto la explotación laboral como la segregación étnica de la población negra que ahora ha fraguado en el hipergueto.

¿Por dónde podemos avanzar?

Entramos ahora en la fase constructiva y propositiva de este comentario editorial. Nos apoyamos en la propuesta de la filósofa norteamericana Nancy Fraser, que propone avanzar en la línea de la redistribución económica, del reconocimiento socio-cultural y de la representación política.

Como ya hemos indicado en las páginas precedentes, la cuestión de los derechos socio-económicos está en la base de la discriminación racial; en buena parte explica por qué surge, por qué se mantiene o se reproduce, y cómo se puede superar. En otras palabras, hablar de justicia racial es hablar de pobreza. El asunto pasa, pues, por la *redistribución de la riqueza* que implica una política fiscal progresiva. Son necesarios programas asistenciales, como los famosos cupones de comida (*food stamps*), con unos 45 millones de receptores, de los que el 40% son blancos, el 26% negros y el 10% hispanos. Son también imprescindibles programas educativos como Head Start, un programa federal que atiende anualmente a cerca de un millón de menores en situación de riesgo social. Pero, a la vez que se refuerzan éstas y otras iniciativas, mejorando su eficiencia, hay que impulsar medidas estructurales que permitan superar la desigualdad económica, en el acceso al empleo y en las condiciones laborales. En este sentido, es posible que lo

más importante en estos momentos en EE.UU. sea prevenir una especie de «guerra entre pobres»; es decir, ante una sociedad más compleja y plural, donde la minoría afroamericana (13% de la población) convive con una creciente minoría latina (17% del total), y ambas sufren la discriminación y “compiten” en el mismo espacio por los mismos recursos escasos, es muy posible que la conflictividad racial cambie de tonalidad. La experiencia de estas décadas pide combinar un enfoque pragmático, basado en evidencias y en programas innovadores, con un planteamiento integral, transformador y estructural. Sin ello, hablar de políticas de igualdad es una quimera.

Junto a las políticas de igualdad, son necesarias políticas de la diferencia. Es decir, junto a la redistribución es necesario el *reconocimiento de los derechos culturales*, particularmente de las minorías étnicas. En este punto queremos señalar el avance que ha supuesto la normalización de la presencia de minorías en el espacio público y en los medios de comunicación, como medida que disminuye la estigmatización. Pero esto, de por sí, resulta insuficiente. Es bien conocido el fenómeno conocido como *acting white*, por el que jóvenes negros se comportan «como si fueran blancos» (minusvalorando rasgos propios de identidad grupal) ante la evidencia percibida de que así les irá mejor en la vida. Diversas encuestas de opinión publicadas a propósito de los últimos estallidos de violencia racial muestran una percepción muy distinta de la realidad social entre la población blanca y afroamericana, por ejemplo ante la igualdad de oportunidades o la violencia policial. Hay una diferencia cultural evidente en la sociedad pero, aún hoy, permanece un marcado discurso dominante que refuerza la discriminación. En ámbitos académicos se ha hablado del desfase afectivo (*empathy gap*) que dificulta a la población mayoritaria entender la discriminación que sufren las minorías. Pongamos un último ejemplo: hasta ahora, todos los billetes de dólar en Estados Unidos han tenido la efigie de un varón blanco; por primera vez, es posible que una antigua esclava negra llamada Harriet Tubman (Araminta Ross) aparezca en los billetes de 20\$. Cualquiera puede comprender que medidas como ésta son necesarias, pero también insuficientes.

En tercer lugar, hay que decir una palabra sobre la representación y los derechos políticos, tras lo afirmado en los dos párrafos anteriores. Nancy Fraser señala que «la estratificación de clases se corresponde con la mala distribución (*misdistribution*) y la jerarquía de estatus se corresponde con el reconocimiento erróneo (*misrecognition*)» y que la combinación de ambos provoca la ruptura de «un único principio supremo de justicia, el principio de *paridad participativa*»; es decir, que «a algunos miembros de la sociedad se les impide participar por igual con los demás en la interacción social». Y es que una cosa es lograr el derecho al voto y otra muy distinta, ejercerlo. En las elecciones presidenciales de EE.UU. en 2008, por ejemplo, la participación electoral fue del 55%, llegando al 65% entre la población blanca y quedándose en apenas el 32% entre los hispanos. La gran diferencia, de todos modos, se establece en la participación por clase social, nivel de ingresos y resultado educativo: por ejemplo, sólo votó el 23% de quienes que no terminaron la enseñanza secundaria, pero el 76% de los que tienen un título universitario. Es muy difícil sentirse parte de una democracia formal que, en el día a día, dificulta la participación real. También hay que destacar aquí el papel del movimiento comunitario-ciudadano, incluyendo las iglesias, en esta dirección de fomentar la participación y el voto en las elecciones (algo en lo que el propio Barack Obama estuvo implicado antes de entrar en política).

Conclusión

El camino de la integración étnica y social no es fácil. Si Martin Luther King representa la vía profética, reformadora e integradora, Malcolm X sería la plasmación de la postura rupturista. En otro momento histórico, Barack Obama indica las posibilidades y los límites de la acción institucional, tan necesaria como también insuficiente. La historia muestra que no basta cambiar las leyes; hay que modificar también, aquí y allá, las mentalidades, las prácticas, los comportamientos en los distintos ámbitos de la realidad. Y eso, sin duda, requiere tiempo. Aquí hay que recordar, una vez más, el importante papel que han jugado, juegan y deben

seguir jugando las iglesias y las diversas confesiones religiosas. Y hay que recordar que la realidad admite muchos matices, más allá del blanco y el negro: matices en los procesos de integración y de justicia racial; y matices en la misma configuración de la sociedad, con la incorporación de otras minorías étnicas y con el papel siempre presente de las cuestiones socioeconómicas, también en los asuntos raciales o étnicos. Ahí está el reto ético. ■

SALTERRAE



JEAN-DANIEL CAUSSE /
ÉLIAN CUVILLIER

**Viaje a través
del cristianismo.**
*Exégesis, antropología,
psicoanálisis*

216 págs.
P.V.P.: 13,95 €

¿Cuál es el gesto central del cristianismo y en qué consiste su singularidad? A lo largo de una entrevista apasionante, Jean-Daniel Causse y Élian Cuvillier nos proponen reinterpretar la herencia del cristianismo recurriendo a la exégesis, la antropología y el psicoanálisis. Lejos de ceder a cualquier pretensión de restauración o a la nostalgia, el desafío consiste en retomar los grandes símbolos del cristianismo, con el fin de comprender qué es lo que construyen como lógica del pensamiento y lo que estructuran como forma de existencia.



Apartado de Correos, 77 - 39080 Santander (ESPAÑA)
pedidos@grupocomunicacionloyola.com
